 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO CONTROL POLÍTICO	CÓDIGO: CTP-FO-004
	PRESENTACIÓN PROPOSICIONES	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019

PROPOSICIÓN No. \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_

**Tema:** Proposición Aditiva al Proyecto de Acuerdo 1004 de 2025 “Por el cual se expide el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá, Distrito Capital para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026 y se dictan otras disposiciones”.

En ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución y la Ley, y en especial las consagradas en el artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, el artículo 40 de la Ley 152 de 1994 y el artículo 48 del Acuerdo 878 de 2023, los honorables concejales abajo firmantes nos permitimos presentar la siguiente proposición ADITIVA contemplada en el numeral segundo del artículo 85 del Acuerdo 741 de 2019, en los siguientes términos:

1. PROPOSICIÓN :


**Modifíquese el artículo 2 del P.A. 1004 de 2025 ““Por el cual se expide el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá, Distrito Capital para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026 y se dictan otras disposiciones”**

Adicionar al Presupuesto Anual de Gastos e Inversiones del Distrito Capital 2026, en el Artículo 2, dirigido al **INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON**, un monto de 322,612064 millones de pesos. (**Trescientos veintidós millones seiscientos doce mil sesenta y cuatro pesos.**) para el proyecto de inversión 7972 Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones del IDIPRON Bogotá D.C. De este modo, el total para la entidad sería 115.421.747.064

**Marco normativo:**

La atención integral a la población en situación de calle no es una opción programática sino una **obligación jurídica y ética del Estado colombiano**, respaldada por un sólido marco normativo nacional y distrital que reconoce este fenómeno como un asunto de derechos humanos. La **Constitución Política de Colombia**, en sus artículos 1, 2, 13 y 49, establece el deber del Estado de garantizar la dignidad humana, la igualdad material y el acceso efectivo a servicios sociales que permitan la inclusión y protección de las personas en mayor situación de vulnerabilidad. A su vez, la **Ley 1641 de 2013** creó la **Política Pública Social para Habitante de Calle**, definiendo responsabilidades claras

p: Constanza.  
1-Dic-2025.  
3:42 p.m.

 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO CONTROL POLÍTICO	CÓDIGO: CTP-FO-004
	PRESENTACIÓN PROPOSICIONES	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019

para las entidades territoriales en materia de atención, rehabilitación, restablecimiento de derechos y procesos de inclusión social. Esta ley exige que las entidades cuenten con los recursos humanos, técnicos y financieros suficientes para implementar programas que respondan al carácter multidimensional del fenómeno.


En el ámbito distrital, el **Acuerdo 686 de 2017**, que adopta la Política Pública Social para el Habitante de Calle en Bogotá, establece que la ciudad debe garantizar servicios continuos y de calidad para esta población, priorizando el enfoque diferencial, territorial y de derechos. De igual manera, el **Plan Distrital de Desarrollo vigente**, como instrumento de planificación superior, determina metas y proyectos de inversión orientados al fortalecimiento de los servicios sociales y a la superación de las condiciones de exclusión que enfrentan las personas habitantes de calle. Así, la ejecución presupuestal no es meramente operativa, sino un requisito para el cumplimiento de mandatos legales y misionales.

En este contexto, la reducción presupuestal proyectada para 2026 no solo compromete la capacidad administrativa y operativa de la entidad, sino que **contradice los mandatos normativos** que obligan al Distrito a incrementar —y no disminuir— los esfuerzos institucionales para atender una problemática creciente. Las cifras muestran que la población habitante de calle aumentó un **9,8% entre 2017 y 2024**, alcanzando 10.478 personas, de las cuales el **18,2% son jóvenes entre 18 y 29 años**. Este incremento refuerza la necesidad de ampliar servicios, talento humano y estrategias de intervención, no de restringirlos.

Si la entidad enfrenta recortes que afectan en promedio el **40% del talento humano**, así como los proyectos de inversión y la programación de metas, se estaría desconociendo la responsabilidad legal del Distrito de garantizar continuidad, calidad y cobertura en la atención. Reducir la capacidad institucional implica limitar la prevención, el acompañamiento psicosocial, los procesos de inclusión y la respuesta efectiva a una población que ya se encuentra en un alto nivel de exclusión social.

Por tanto, desde una perspectiva normativa, técnica y de derechos humanos, se evidencia que mantener e incluso fortalecer los recursos destinados a la atención de la población en situación de calle no solo es necesario: **es un imperativo legal y misional**. La proposición busca precisamente asegurar que el Distrito cumpla con los estándares exigidos por la Constitución, la Ley 1641 de 2013, el Acuerdo 686 de 2017 y el Plan Distrital de Desarrollo, evitando retrocesos que pondrían en riesgo la vida, la dignidad y los derechos fundamentales de esta población.

**2. Justificación técnica:**

 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO CONTROL POLÍTICO	CÓDIGO: CTP-FO-004
	PRESENTACIÓN PROPOSICIONES	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019

La misionalidad del IDIPRON se encuentra en riesgo debido a la creciente demanda social y las restricciones presupuestales proyectadas para la vigencia 2026. El perfil demográfico y social de la población habitante de calle evidencia una tendencia sostenida de incremento que exige mayor capacidad institucional, no menos. En los últimos diez años, el número de personas en situación de calle pasó de **9.538 en 2017 a 10.478 en 2024**, lo que representa un aumento del **9,8%**. De este total, la Administración reporta que **el 18,2% son jóvenes entre 18 y 29 años**, precisamente el grupo poblacional al que el IDIPRON debe brindar atención prioritaria bajo su mandato legal.

Esta dinámica poblacional demuestra que las necesidades de atención, acompañamiento y procesos pedagógicos no solo se mantienen, sino que se intensifican. En consecuencia, cualquier debilitamiento institucional o financiero limita la capacidad del Distrito para cumplir con los estándares de protección, restablecimiento de derechos y transición social y productiva de esta población.

Sin embargo, la **proyección presupuestal para 2026**, según la información remitida por la Secretaría Distrital de Planeación, generaría afectaciones estructurales tanto en la capacidad operativa como en la misionalidad del IDIPRON. Las restricciones propuestas impactarían:

- **Alrededor del 40% del talento humano**, indispensable para la operación directa de los programas misionales.
- **La programación de las metas vigentes del Plan Distrital de Desarrollo**, comprometiendo el cumplimiento de los compromisos institucionales.
- **Los proyectos de inversión**, especialmente aquellos orientados a la atención integral, la intervención en calle, la vinculación educativa y los programas pedagógico-productivos.
- **La respuesta operativa**, reduciendo la capacidad de atención, los horarios, las rutas de acercamiento y las acciones de seguimiento psicosocial.

La combinación de un aumento sostenido en el número de habitantes de calle y jóvenes en riesgo, junto con una disminución drástica en los recursos y equipos necesarios para

